



InSight
Crime

El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela

#ESTADOHÍBRIDO

El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela

Julio 2023

Autores:

Unidad Investigativa de Venezuela

Diagramación y diseño:

Ana Isabel Rico, Juan José Restrepo, María Isabel Gaviria – Diseño gráfico

Elisa Roldán – Dirección creativa

Proceso editorial:

Chris Dalby - Editor jefe

Peter Appleby, Liza Schmidt, Juan Diego Posada – Editores

Diego García, Maria Luisa Valencia – Traductores



Contenido

1	Chávez y los orígenes del Estado híbrido de Venezuela	5
	Grupos armados híbridos: a apuntalar la revolución.....	6
	Economías híbridas y gobernanza: Chávez pone las bases	9
	Maduro y el nuevo Estado híbrido	10
2	Los colectivos, las Cupaz y la búsqueda del híbrido perfecto	15
	Los colectivos: la placa de Petri de las Cupaz.....	16
	Imponer orden a los colectivos	18
	Las Cupaz y las bandas.....	20
	La criminalización de las Cupaz.....	21
3	Gobernanza híbrida y los dominios criminales del Tren de Aragua	23
	Tocorón, la fortaleza del crimen	24
	La casa fuera de la prisión	26
	La réplica del modelo San Vicente	30
4	Las FBL: auge y caída de una guerrilla híbrida	34
	El ascenso de una guerrilla Bolivariana	35
	El arte de la política armada: la mimetización estatal de las FBL	37
	Ocaso y reemplazo de un grupo armado híbrido	38

5	El desafío de Maduro: reformar el Estado híbrido de Venezuela	42
	Grupos armados híbridos	43
	Gobernanza híbrida	44
	Economías híbridas.....	45
	Contenido relacionado	47

1

Chávez y los orígenes del Estado híbrido de Venezuela



Cuando el presidente venezolano Hugo Chávez sucumbió al cáncer en 2013, ya se avistaba en el horizonte una tormenta perfecta de diferentes crisis para su vicepresidente y sucesor.

Muerto el líder y fundador de la Revolución Bolivariana, el reclamo de legitimidad democrática de Maduro se materializó en unas elecciones especiales que ganó por un estrechísimo margen.

Es más, la economía venezolana estaba al pie de un despeñadero que devastaría la población y dejaría al Estado casi en bancarrota. Eso agravaría la inseguridad y la delincuencia, además de la pobreza y el malestar social, que, a su vez, reforzarían el respaldo popular e internacional hacia la oposición política.

Para completar, Maduro no tenía ni el carisma popular ni el respaldo al interior del movimiento político chavista o del ejército venezolano, que Chávez había aprovechado para mantener la unidad y su comodidad en el poder.

La respuesta de Maduro fue construir uno de los legados más turbios de la era Chávez: la convergencia del Estado venezolano con grupos armados y con el crimen organizado. Lo que siguió llevó a Venezuela por una vía inexplorada de evolución criminal.

En la actualidad, grupos criminales y actores estatales corruptos se unieron para formar un Estado híbrido que combina la gobernanza con la criminalidad, y donde los grupos armados ilegales actúan al servicio del Estado, mientras que en su interior se conforman redes criminales.

Grupos armados híbridos: a apuntalar la revolución

Los primeros grupos definitivamente híbridos de Venezuela se conformaron a comienzos de la década del 2000 con un fin primordial: mantener a Chávez en el poder.

Empezó con **los colectivos**, término aplicado a las organizaciones políticas de base que abarcaban el espectro desde militantes armados y subversivos hasta organizaciones sociales y culturales que atendían comunidades desprotegidas.

En un inicio, Chávez había tomado medidas para integrar estas organizaciones en su movimiento político, por medio de la red de los “Círculos Bolivarianos”, que ofrecía recursos estatales para reunir estos grupos entre ellos mismos y con el Estado. Después de que demostraran ser esenciales en la movilización de las protestas populares que reinstauró a Chávez en el poder después de un golpe militar de 48 horas en 2002, el gobierno llevó las cosas mucho más lejos, con la entrega de armas, financiamiento y entrenamiento.

“Estos grupos pasaron de ser ideológicos a recibir entrenamiento militar”, comentó un exgeneral del Ejército, quien habló con InSight Crime bajo reserva de su identidad. “Cuando uno ve que la amenaza interna para el gobierno venía de la oposición política, entonces uno entiende que los estaban entrenando para combatir a la oposición”.

Un cambio similar se observó en la frontera de Venezuela, donde se estaban acumulando tensiones con Colombia, a la que Chávez calificó de “peón” de su principal adversario político en el escenario mundial: Estados Unidos.

Grupos armados en Venezuela: de adversarios a grupos incrustados en el Estado

InSight Crime ha desarrollado una escala para clasificar a los grupos armados y redes criminales de Venezuela en función de su relación con el Estado venezolano.

 Ver información más abajo



**Ni el Estado ni los grupos criminales hacen parte de un mismo núcleo o son homogéneos, y están sujetos a constantes cambios, lo que dificulta establecer definiciones precisas. Por esta razón, las definiciones anteriores pretenden ser un marco teórico para comprender la dinámica criminal, más que una categorización definitiva de grupos específicos. Con el fin de reflejar esto, la escala que se muestra a continuación incluye categorías intermedias para ilustrar cómo los grupos pueden pertenecer principalmente a una tipología pero aún así mantener características de otra.*

1

Los grupos armados no estatales adversarios se enfrentan o compiten directamente con el Estado debido a que tienen objetivos criminales o políticos divergentes. Pueden atacar o enfrentarse al Estado, el Estado puede perseguir activamente al grupo, o el grupo puede tratar de evitar por completo los enfrentamientos con el Estado.

4

Los grupos armados no estatales cooperativos mantienen relaciones mutuamente beneficiosas con elementos del Estado que son de alcance limitado, con objetivos específicos y suelen ser de naturaleza transaccional. A través de acuerdos ad-hoc o convenios recíprocos, los grupos y elementos del Estado practican intercambios de recursos económicos, en forma de dinero o acceso a economías criminales; así como prestan servicios, tales como protección e impunidad, suministro de armas o equipos militares, acceso y control de territorios, y violencia por encargo.

7

Los grupos armados híbridos son organizaciones cuya cooperación y coordinación con elementos del Estado es sistemática y constituye una característica esencial de sus operaciones. Sus intereses y objetivos, ya sean políticos, económicos o estratégicos, se han entrelazado con una o varias ramas del Estado a nivel local, regional y/o nacional. Estos grupos coordinan habitualmente acciones y estrategias con sus aliados estatales, y se puede presentar cierto nivel de integración de personal, recursos y operaciones.

10

Los grupos incrustados en el Estado son redes delictivas cuyos principales líderes y miembros principales ocupan cargos dentro del Estado. Pueden aprovechar esta posición para obtener beneficios ilícitos, o pueden actuar ilegalmente para promover los fines y objetivos de sus posiciones estatales. En sus funciones delictivas paralelas se organizan para llevar a cabo, controlar, o explotar de manera sistemática actividades ilegales, bien sea de forma independiente o en cooperación con actores no estatales o híbridos.

Aun antes de subir al poder, Chávez había cultivado lazos políticos con las insurgencias izquierdistas de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como con el grupo guerrillero de Venezuela, denominado Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL). Pero cuando se distorsionaron las relaciones con Colombia y Estados Unidos, Chávez tomó medidas para integrar estos grupos a sus planes geopolíticos.

Lo que comenzó como apoyo ideológico a su lucha **evolucionó en una coordinación sistemática** y en intercambios de recursos y servicios como armas, suministros y lavado de dinero, todos dirigidos al logro de objetivos estratégicos comunes.

“Era evidente que el Estado estaba financiando o apoyando los movimientos subversivos guerrilleros con el fin de que, si en algún momento ocurría una intervención, una invasión, contarán con un elemento armado adicional que pudiera participar” en la lucha, comentó Liborio Guarulla, quien fungió como gobernador del estado fronterizo de Amazonas entre 2001 y 2017.

“Instalaron campamentos en la región fronteriza y yo temía hacer una denuncia oficial como gobernador, ya que cuando hablaba con funcionarios de alto rango del gobierno, todos me decían lo mismo: que esa era la orden de arriba”, añadió Guarulla.

El ascenso de estos grupos armados híbridos en Venezuela se vio igualado por la proliferación de redes criminales insertadas en el Estado, una tendencia motivada por la misma lógica: proteger el poder de Chávez.

Chávez se aseguraba el respaldo de las fuerzas de seguridad y de poderosos actores políticos otorgándoles cargos a los partidarios del régimen, quienes, a su vez, usaron esos cargos para montar redes de corrupción dedicadas a malversar los recursos públicos. Al mismo tiempo, mostró connivencia hacia la creciente participación de actores del gobierno en economías criminales, como el narcotráfico transnacional.

Este proceso llevó al surgimiento de las redes criminales insertadas en el Estado más importantes y poderosas de la era Chávez, las células narcotraficantes conocidas en conjunto como **el Cartel de los Soles**, en referencia a la insignia solar en los uniformes de los generales del Ejército.

Economías híbridas y gobernanza: Chávez pone las bases

En 2006, Chávez ganó la reelección con una victoria aplastante. Era popular entre los votantes en el país y gozaba del respaldo de aliados regionales en el exterior por la llegada al poder de varios gobiernos de izquierda en América Latina. Además, había reconfigurado el Estado de manera que se premiara la lealtad y se marginara el disenso.

Los enemigos de Chávez planteaban una amenaza cada vez menor a su poder, pero en su segundo mandato comenzó a enfrentar enemigos mucho más insidiosos: el deterioro económico y la descomposición social.

Una vez más, las soluciones que implementó acelerarían el desarrollo del Estado híbrido, que llevarían al surgimiento de nuevas formas de economías híbridas para captar recursos y a la gobernanza híbrida para controlar espacios ingobernables.

Después del derrumbe de los precios del petróleo tras la crisis económica global de 2008, Chávez quiso explotar la riqueza mineral del estado de Bolívar para compensar los ingresos perdidos. Sus esfuerzos por nacionalizar el sector minero fallaron estrepitosamente, pero el sector minero informal, controlado por las bandas, llenó el vacío dejado por el colapso de la industria y ofreció nuevas oportunidades criminales.

Las bandas mineras, conocidas como *sindicatos*, estaban [presuntamente bajo la protección y el patrocinio](#) del general retirado Francisco Rangel Gómez, antiguo camarada de Hugo Chávez en el Ejército, quien fue gobernador de Bolívar entre 2004 y 2017.

“Hay un grupo en el gobierno regional que está armando criminales y asignándoles responsabilidades sobre ciertas zonas”, relató el exoficial de inteligencia José Lezama Gómez en una declaración juramentada presentada a la Asamblea Nacional en 2016.

Esta combinación de bandas delincuenciales y oro convirtió la minería en una economía híbrida: controlada en parte por la delincuencia y en parte por el Estado.

Al mismo tiempo se vivía una escalada de las tasas de homicidios y los delitos predatorios, que le valieron a Venezuela la deshonrosa distinción como uno de los países más violentos del mundo. La violencia afectó especialmente las zonas urbanas desfavorecidas, y, de manera más espectacular, los centros penitenciarios, donde las denuncias de bandas carcelarias armadas con armas semiautomáticas enfrentándose entre ellas, y con los guardias, sacudieron el mundo.

Esta vez, la solución que buscó el gobierno fue una forma de gobernanza híbrida, que usaba el crimen organizado para imponer orden en el caos.

Este fenómeno comenzó en las prisiones, donde el [gobierno cedió el control](#) del interior de las mismas a los jefes de bandas conocidos como *pranes*. A cambio de mantener la paz, no solo se permitió a los pranes elegidos que gobernarán la vida en prisión, sino que también se les otorgó control —y se les permitió lucrarse— de todos los movimientos dentro y fuera de las prisiones, desde las visitas, hasta productos de primera necesidad como víveres, e incluso contrabando, como drogas y licor.

“Ellos reconocieron la importancia de los pranes negociando y llegando a acuerdos con ellos: el pran es una autoridad. Esto ofrece una perspectiva interesante de la política, porque con ellos las cosas funcionan bien”, como le dijo a InSight Crime la exdirectora nacional del sistema de prisiones, dependiente del Ministerio de Justicia, Mónica Fernández.

La cesión del poder a los pranes sentó un precedente: la gobernanza negociada entre grupos armados y el Estado para beneficio mutuo.

Pronto se aplicó la misma lógica por fuera de los muros de las prisiones [con los acuerdos de las “Zonas de Paz”](#), en el marco de los cuales se retiraron las fuerzas de seguridad de territorios controlados por las bandas a cambio de que estas se comprometieran a reducir la violencia y, eventualmente, a desarmarse. Pero aunque hubo un repliegue de las fuerzas de seguridad, las bandas incumplieron su parte del acuerdo, y dieron inicio a una nueva era de gobernanza criminal para muchas comunidades.

Maduro y el nuevo Estado híbrido

Bajo el régimen de Nicolás Maduro, el rol de los grupos armados híbridos existentes comenzó a evolucionar y extenderse, mientras que se presentaron nuevas oportunidades a grupos que antes fueron antagonistas o cooperadores de asegurar ventajas convirtiéndose en híbridos.

Cuando creció la oposición al nuevo gobierno, los colectivos se transformaron en [grupos de choque](#) chavistas desplegados para reprimir con violencia las protestas populares masivas que se extendían por todo el país.

Las amenazas al régimen de Maduro también alteraron su relación con los grupos guerrilleros. La insurgencia de Colombia evolucionó para convertirse en [grupos paramilitares a favor del Estado venezolano](#) y se autoproclamaron defensores de la Revolución Bolivariana.

InSight Crime ha recopilado evidencia que muestra que tanto los colectivos como las guerrillas se han coordinado directamente con las fuerzas de seguridad para atacar a enemigos y rivales comunes, incluso llevando a cabo operativos conjuntos lado a lado.

“[Durante las protestas contra Maduro] era difícil saber quién hacía estas cosas, quién asesinaba, porque las fuerzas de seguridad y los colectivos trabajaban hombro a hombro, y los colectivos tenían uniformes del Ejército”, comentó un funcionario municipal del estado de Lara, quien pidió que se mantuviera su anonimato por temor a represalias.

En épocas de elecciones, también había despliegues de colectivos y guerrillas, que en ocasiones usaban una combinación de coerción violenta y sobornos para movilizar, controlar, o suprimir a los votantes en las zonas donde ellos tenían presencia, siempre a favor del gobierno de Maduro.

“[Los colectivos] han perdido la ideología que tenían al comienzo y han adoptado un carácter clientelista”.

Aunque los observadores internacionales regresaron al país para las elecciones locales y regionales de 2021, la interferencia de los híbridos era evidente, en especial en rincones alejados, donde llegaban pocos observadores, como las zonas rurales del estado de Táchira, plagado de guerrillas.

“[El ELN] llegaba a los centros de votación y se estacionaban en las puertas y no dejaban pasar a nadie que dijera que no iba a votar por los candidatos del gobierno”, comentó un funcionario local del municipio del Táchira, Seboruco. “Y en el caso de Los Ríos, que es su epicentro, retiraron a los testigos electorales y encerraron a los trabajadores de los puestos en los centros [durante la votación]”.

Pero las funciones de los grupos armados híbridos no se han limitado a la represión política. Y la nueva generación de híbridos no son apenas simpatizantes en el plano ideológico, también hay grupos criminales sin interés en la política más allá del provecho particular.

En el nuevo Estado híbrido de Maduro, cualquier cosa es posible: narcotraficantes financian obras públicas, colectivos administran servicios públicos, pranes coordinan traslados de presos, y hay bandas que han creado fundaciones de beneficencia, las cuales reciben financiación estatal para cualquier cosa, desde programas deportivos hasta clínicas.

Esta delegación de las funciones del Estado también ha permitido al régimen de Maduro canalizar recursos y oportunidades económicas hacia los grupos armados, creando así una relación clientelista.

Esto es más evidente con el programa subsidiado de alimentos que manejan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), cuyas cajas de productos básicos son distribuidas y, en muchos casos, vendidas a precios inflados por colectivos, guerrilleros y bandas. Y el caso es más extremo con los colectivos, que se lucran no solo de las cajas de los CLAP, sino también del control que ejercen con la venia del Estado sobre estaciones de combustible subsidiado, vivienda, transporte público, gas para uso doméstico y hasta el suministro de agua.

“[Los colectivos] han perdido la ideología que tenían al comienzo y han adoptado un carácter clientelista”, comentó un exjefe de policía del estado Lara, quien habló con InSight Crime bajo la condición de que se mantuviera su anonimato.

Pero las oportunidades económicas no solo fluyen del Estado hacia los grupos armados.

El gobierno de Maduro, al borde de la bancarrota, solo puede pagar salarios de hambre a las fuerzas de seguridad cuya lealtad es necesaria para mantenerlo en el poder. Y las ganancias de la corrupción, que se usaron para comprar la lealtad de aliados políticos y de la cúpula de la seguridad, se han agotado.

El Estado híbrido ofreció soluciones al permitir que las redes criminales insertadas en el Estado trabajaran con los grupos armados en las economías criminales, y al dar vía libre al surgimiento de nuevas formas de economías híbridas, donde bienes y recursos legales controlados por el Estado se solapan con las cadenas de suministro de la delincuencia.

Las economías criminales tradicionales, como [el narcotráfico](#), son controladas mediante modelos cooperativos por redes criminales insertadas en el Estado y sus cómplices criminales. Las ganancias se dividen con los actores estatales, o se les entrega una parte, para garantizar la protección y facilitar las operaciones.

Actores estatales y grupos criminales se lucran de estas nuevas economías híbridas, como el [tráfico de chatarra](#), los mercados negros, el contrabando de mercancía y el [de gasolina](#).

“No queda ningún oficial [del Ejército], porque los que tenían una pizca de dignidad se fueron, y los que quedan solo están esperando su turno para golpear la piñata”, comentó un oficial retirado del Ejército, que habló con InSight Crime bajo la condición de anonimato. “Todas las fuerzas de seguridad son mercenarios actualmente”.

La economía híbrida original —el tráfico de oro— mantiene su importancia, y el estado Bolívar, rico en este mineral, se ha convertido en un [microcosmos de las nuevas economías híbridas](#).

Bajo el régimen de Maduro, el estado Bolívar se ve acorralado por actores políticos y fuerzas de seguridad de todo tipo de jerarquía, algunos locales y otros de afuera de la región, todos ávidos de ganancias del oro y alineándose con los distintos grupos armados que participan en minería. Cada quien trabaja para su propio beneficio, y aunque en ocasiones cooperan, otras veces sus intereses chocan. La única norma es que el gobierno central tiene su tajada.

“De hecho, el alcalde no tiene guardaespaldas de la policía. Sus guardaespaldas pertenecen a la banda”.

“En las minas, los sindicatos están a cargo”, le declaró a InSight Crime un minero en Tumeremo, quien solicitó que se mantuviera su anonimato por razones de seguridad. “Pero el sindicato debe hacer pagos mensuales a las fuerzas de seguridad y también se manda una tajada grande a la gente del gobierno”.

Los nexos cada vez más estrechos entre el Estado y los grupos armados también han llevado a un solapamiento cada vez mayor de personal y líderes, pues ambas partes comenzaron a pasarse hacia el lado de los otros.

Algunos grupos armados incursionaron en política, [postulando a sus parientes](#) y cómplices como candidatos o patrocinando a políticos escogidos por ellos mismos.

Algunos lanzaron sus propios partidos políticos, como la guerrilla de las FBL, cuya Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) ganó el control de los municipios del estado de Apure y se hizo a varios escaños en la Asamblea Nacional.

El colectivo Tupamaro llevó esta evolución un paso más adelante al convertirse en partido político en propiedad, pero respaldado por la amenaza latente de la acción armada.

“Si no se nos da un espacio para expresarnos políticamente, entonces [el rearme] sería una opción. No se ha descartado”, afirmó el líder de los Tupamaros, William Benavides, en conversación con InSight Crime.

Por otro lado, los actores estatales comenzaron a tomar control directo de los grupos armados. InSight Crime ha investigado casos de jefes de policía y alcaldes locales o cómplices suyos que asumen control directo sobre las bandas, o que las usan como brazo armado clandestino para hacer el trabajo sucio.

“El control social [de la banda] les permitió ejecutar acciones ‘soterradas’, y el alcalde tenía interés en mantenerlos como brazo armado para hacer el trabajo sucio por él”, comentó un exjefe de policía en un municipio del estado Miranda donde se selló dicho acuerdo, hablando con InSight Crime bajo la condición de anonimato.

“De hecho, el alcalde no tiene guardaespaldas de la policía. Sus guardaespaldas pertenecen a la banda”, añadió.

En los ejemplos más extremos, el mismo gobierno se ha convertido en una empresa criminal.

Esto llegó a un culmen en la administración del gobernador Omar Prieto, del estado Zulia. Prieto y sus secuaces dentro y fuera del gobierno extorsionaban y confiscaban negocios. Empezaron a disputar el contrabando de gasolina, mercancías y chatarra, usando la autoridad del cargo para expulsar a otros actores. Y usaron a la policía para eliminar a sus rivales.

“El proyecto político de Omar Prieto como gobernador era un proyecto criminal en el poder político”, comentó un antiguo líder político chavista del estado Zulia, hablando con InSight Crime bajo anonimato.

Sin embargo, Prieto perdió su aspiración a la reelección en 2021, lo que indica que aun en el Estado híbrido de Maduro, hay límites para los extremos a los que pueden llegar en la criminalidad los actores políticos.

Ahora, celebrando 10 años en el poder, Maduro parece haber superado lo peor de la tormenta. La economía, aunque sigue en recesión, al menos se ha estabilizado. La oposición política es débil y está dividida. Maduro ha acumulado cargos claves en el gobierno nacional y regional, con aliados y partidarios del régimen. Y Venezuela está reintegrándose poco a poco en la comunidad internacional.

Pero para salvaguardar su posición, Maduro precisa de legitimidad en su país y en el exterior. La criminalidad descontrolada que ayudó a mantenerlo en el poder puede representar un obstáculo para lograr esa meta. Se enfrenta con un nuevo desafío: imponer orden en el Estado híbrido que creó. Y la pregunta que enfrenta ahora es si puede devolver este singular genio a la botella.

2

Los colectivos, las Cupaz y la búsqueda del híbrido perfecto



En marzo de 2019, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, creó una nueva facción del movimiento político de la Revolución Bolivariana: las Cuadrillas Defensoras de la Paz. A esas cuadrillas, conocidas con el acrónimo de Cupaz, se les encargó la tarea de velar por la paz en Venezuela. Pero cuatro años después, las Cupaz se han propagado por toda Venezuela y son todo menos pacíficas.

La red de las Cupaz se creó en 2019, cuando el poder de Maduro parecía en el punto más débil. Una nueva ola de protestas multitudinarias arrasaba el país, mientras que en el exterior los países reconocían en bloque la proclamación, como “presidente interino” de Venezuela, del líder de la oposición Juan Guaidó. Desde el inicio, el gobierno dejó en claro que las Cupaz eran una respuesta a esa amenaza.

“Las Cuadrillas Defensoras de la Paz nacieron como producto del ataque brutal, criminal y terrorista adelantado por el ala fascista de derecha en Venezuela con el respaldo del imperialismo estadounidense para derrocar al Gobierno Bolivariano y tomar control de la riqueza de la nación”, fueron las palabras del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el comunicado de prensa que anunciaba el lanzamiento de este organismo.

Pero mientras que el PSUV pregonaba que las Cupaz era una fuerza de ciudadanos voluntarios para actuar como baluarte contra las “acciones terroristas de la oposición”, en realidad ha actuado como un grupo armado desplegado para controlar la población.

Las Cupaz han sido usadas para reprimir las protestas y la oposición política al PSUV mediante la violencia y la intimidación, han sido desplegadas como tropas de choque para combatir a bandas criminales y se les ha asignado el control de las economías criminales que explotan a las comunidades locales. En el proceso, se han posicionado como la nueva evolución de los híbridos de Venezuela, grupos armados ilegales que trabajan al servicio del Estado o en coordinación con este. Y con esta evolución, se acorta más que nunca la distancia entre el Estado y estos grupos armados.

Los colectivos: la placa de Petri de las Cupaz

Aunque los representantes del gobierno nunca lo han admitido, no cabe duda de que las Cupaz se inspiraron en los grupos armados híbridos originales que tuvo Venezuela: los [colectivos](#).

Los colectivos surgieron en la década del 2000, cuando una red dispar de organizaciones políticas populares de izquierda recibió entrenamiento, financiación y armas del Estado, para luego recibir la orden de defender al presidente Hugo Chávez y a su Revolución Bolivariana contra cualquier enemigo.

Primero Hugo Chávez, y después su sucesor, Maduro, usaron los colectivos para imponer control social y político sobre las comunidades y para [reprimir](#) a la oposición política, muchas veces recurriendo a la violencia.

Los colectivos coordinaban sus acciones de manera sistemática con el Estado. Sus miembros engrosaron las filas de las fuerzas del Estado, como las abusivas Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), o asumieron cargos en el gobierno, llegando incluso a ocupar cargos en ministerios nacionales. Al mismo tiempo, funcionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad se unían a las filas de los colectivos.

Pero cuando Venezuela se vio sacudida por las crisis política y económica después de que Maduro asumiera el poder en 2013, la naturaleza de los colectivos comenzó a cambiar.

El Estado venezolano, destruido por la crisis, necesitaba la ayuda de estas fuerzas más que nunca, en especial para reprimir las protestas masivas que amenazan con sacar a Maduro del poder. Pero la crisis económica lo había dejado casi en la bancarrota, y ya no podía permitirse mantener a los colectivos dentro de la nómina.

La solución fue permitir que los colectivos se **criminalizaran**. El gobierno les ofreció el control de los mercados negros de alimentos subsidiados, del gas de uso doméstico y de la gasolina, y miró para otro lado cuando algunos de esos grupos montaron redes de extorsión o participaron en delitos, como robos, secuestro y microtráfico.

Aunque algunos colectivos mantuvieron su línea ideológica, muchos otros comenzaron a parecer y a actuar más como bandas criminales.

“Aquí somos una mafia”, declaró un líder de un colectivo en el distrito 23 de Enero, de Caracas, en conversación con InSight Crime, bajo la condición de anonimato. “Estar en un colectivo te da más poder, más dinero, más oportunidades. Estar en un partido político significa hacer parte del sistema, pero estar en un colectivo es trabajar a otro nivel totalmente”.

Este poder ha corrompido a la nueva generación de líderes, añadió.

“Los que están a cargo ahora son pedazos de mierda. Consumen cocaína, son borrachos, la escoria de la sociedad, y se tiran a cualquiera en nombre de los colectivos y en nombre de la revolución”, comentó.

Las Cupaz han incorporado las características paraestatales y criminales de la nueva generación de colectivos. Pero mientras que los colectivos se estaban sublevando, las Cupaz ofrecen control directo al Estado.

Después de su creación en 2019, las filas de las nuevas unidades de Cupaz se llenaron de miembros de los colectivos existentes, junto con funcionarios del gobierno local, militantes del PSUV y, principalmente, agentes de fuerzas de seguridad activos y en retiro. Todos ellos siguen una línea de mando directa que comienza en los escalones más altos del PSUV y sigue bajando hasta los gobernadores y alcaldes locales.

“Ellos no tienen ninguna formación ideológica, fueron creados porque [el Estado] necesita un grupo que siga órdenes”, señaló un antiguo líder de un colectivo en el estado Lara, quien rindió su testimonio a InSight Crime bajo condición de anonimato.

Imponer orden a los colectivos

En los cuatro años que han transcurrido desde el lanzamiento de las Cupaz, la red se ha extendido a diez estados de Venezuela, según el seguimiento hecho por InSight Crime de ese grupo.

En cada uno de esos estados, las diferentes Cupaz comparten ciertas características. Usan uniformes negros de las Cupaz, suministrados por el Estado, muchas veces con armas y hasta motocicletas entregadas por el gobierno. Controlan las estaciones de combustible subsidiado y la distribución de alimentos, ambas lucrativas redes en el mercado negro. Y prestan servicios de seguridad a actores e intereses estatales, a la par que reprimen la actividad política de la oposición.

Pero la definición —y los objetivos— precisos de las Cupaz varían de una región a otra.

En la capital, Caracas, los integrantes de los colectivos y los residentes de las comunidades controladas por estos le contaron a InSight Crime que las Cupaz han servido como unificador de los diferentes grupos existentes.

“La creación de este grupo fue la forma que encontraron de homogenizar a los colectivos”, señaló Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente de Defensa de Caracas, organización que opone resistencia a las invasiones de propiedades por parte de los colectivos en el centro de Caracas.

“Las Cupaz son las que más poder tienen porque tomaron control de los servicios públicos”.

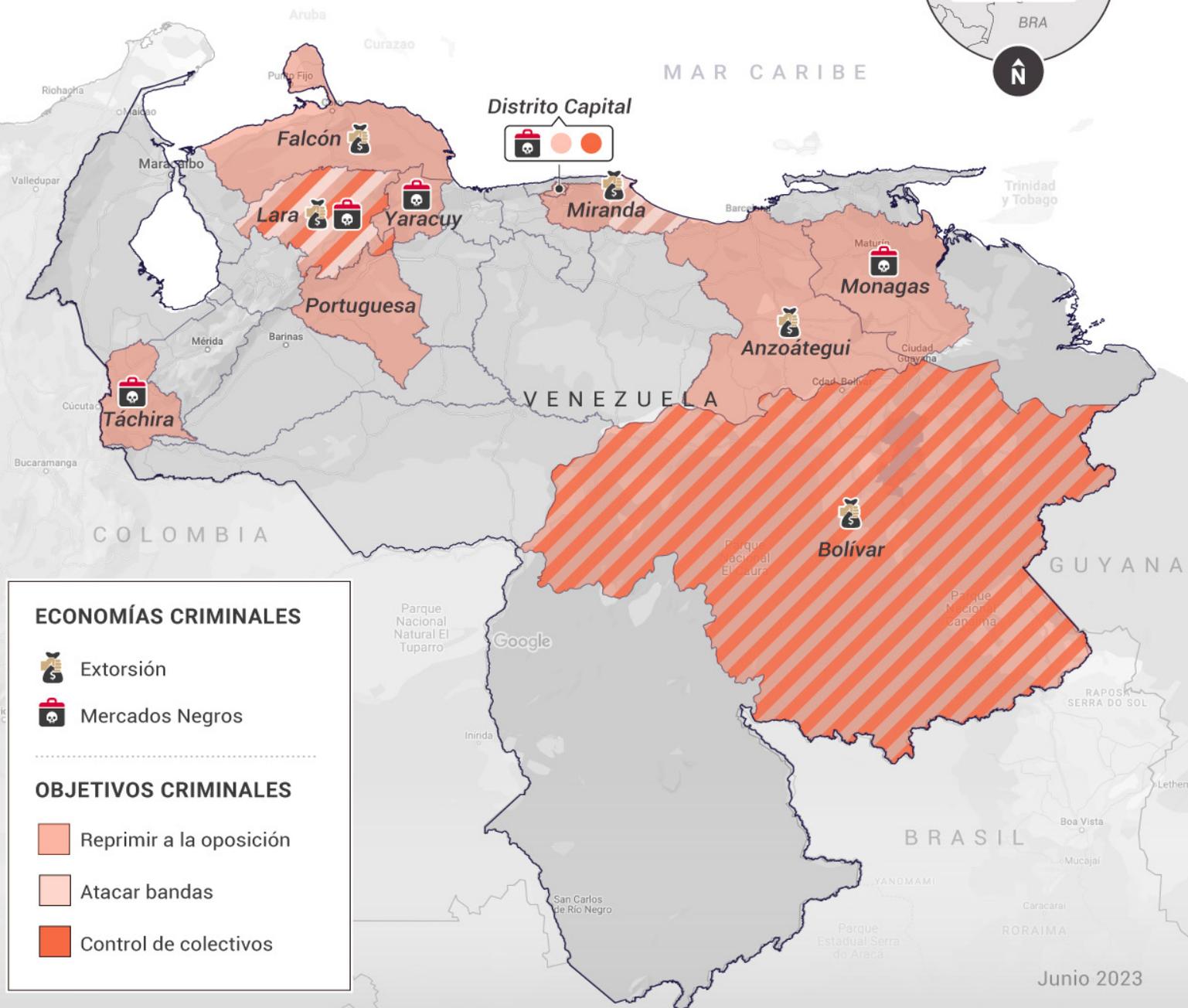
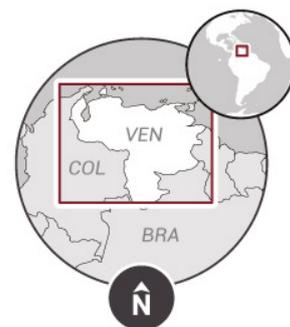
Un integrante de un colectivo de Caracas, hablando bajo condición de anonimato, dijo a InSight Crime que los colectivos o sus miembros se han unido a la red de las Cupaz, mientras siguen actuando con independencia.

“[Las Cupaz] se organizan entre todos los colectivos”, observó. “La línea de mando viene desde arriba, pero nosotros decidimos cuáles órdenes seguimos y cuáles no”.

En el otro **foco importante** de los colectivos en Venezuela, el estado Lara, las Cupaz no se están coordinando con los colectivos existentes, sino que los están absorbiendo o incluso desplazándolos.

Una residente de la ciudad socialista Alí Primera, al norte de Barquisimeto, quien pidió que se mantuviera anónima su identidad por razones de seguridad, describió cómo las Cupaz parecían reemplazar al díscolo colectivo 4F, que por largo tiempo había controlado el proyecto urbanístico de vivienda pública para 4.000 familias. Ahora las Cupaz hacen parte de la vida diaria allí.

¿Dónde y cómo operan las Cupaz en Venezuela?



insightcrime.org

“Las Cupaz son las que más poder tienen porque tomaron control de los servicios públicos”, señaló. “Van por ahí con pistolas, viven en la urbanización, y están encargados de la seguridad. Cuando ha habido operativos de seguridad en la urbanización, ellos son los primeros que han llegado en sus motocicletas”.

Además de ejercer el control social que ejercían los colectivos tradicionales, las Cupaz en Lara también actúan como red de acopio de información para las ramas represivas del Estado, según un excomandante de policía de Lara, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

“La función de las Cupaz es hacer trabajo de inteligencia y reportarla al Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional] y a las Faes”, explicó.

En otros lugares del país, este rol parapolicial ha pasado a ser la función principal de las Cupaz. Y en algunos lugares, el poder que eso les confiere ha llevado a las Cupaz a cruzar la línea hacia la delincuencia abierta.

Las Cupaz y las bandas

Aunque Lara y Caracas son reconocidos por el control social de los colectivos, en la región de Valles del Tuy, del estado de Miranda, son las bandas criminales violentas las que por mucho tiempo han controlado las comunidades. Y cuando las Cupaz aparecieron por primera vez en la región en 2020, se convirtieron en una alternativa, aprobada por el Estado, al dominio de las bandas.

La policía “ejecutó unos cuatro operativos, en uno de los cuales asesinó al jefe de la banda, y cuando ellos terminaron de sacar a las bandas llegaron las famosas Cupaz”, comentó un líder comunitario de la ciudad de Charallave.

“Cuando llegaron, tomaron control de todo. Elementos de las Cupaz fuertemente armados te paraban para revisar tu identificación”, añadió el líder, quien solicitó que se reservara su identidad por temor a represalias.

Ese patrón se repitió en otros lugares de la región, donde las Cupaz ayudaban a desterrar a las bandas y luego ocupaban los espacios dejados por estas. Aunque algunos residentes afirman que las Cupaz fueron menos agresivas con las comunidades después de las incursiones iniciales, para muchos, el nuevo dominio fue peor que el anterior.

“Las Cupaz en [el barrio] Mata de Coco lograron eliminar las bandas, pero ya empezaron a cobrar ‘seguridad’ a los residentes”, le relató a InSight Crimen una periodista local en Tomás Lander, quien solicitó que se mantuviera su anonimato por razones de seguridad.

“Los residentes prefieren los gánsteres a las Cupaz, porque aquellos no exigían dinero. Los gánsteres estaban en su mundo. No se metían con la comunidad”, añadió. “Lo que las Cupaz hacen es pedir y pedir. Es ‘toma lo que es tuyo y hazlo mío’”.

La estrategia de reemplazar las bandas con Cupaz también ha avivado temores de violencia después de que el gánster más notorio de la región, Deiber Johan González, alias “Carlos Capa”, hiciera varios tiros de advertencia en dirección a las Cupaz.

“Si despliegan Cupaz en Colina, los van a atacar hasta que hayamos matado a toda su gente”, advirtió Capa en una nota de voz que circuló por las redes locales de WhatsApp en marzo de 2023. “Si la gente acepta las Cupaz no podrán andar por ahí, ni siquiera los niños, porque habrá plomo volando por todas partes”.

La criminalización de las Cupaz

Por el momento, aún no se desata un conflicto abierto entre las Cupaz y la banda de Carlos Capa en los Valles del Tuy. Pero en otras regiones, el riesgo que plantean las Cupaz a las comunidades no es que queden atrapados en el fuego cruzado de sus conflictos con las bandas, sino que las Cupaz se conviertan en bandas de un todo y por todo.

En el estado Anzoátegui, líderes políticos y comunitarios, que hablaron con InSight Crime de manera anónima por razones de seguridad, describieron cómo personas armadas pertenecientes a las Cupaz han estado acechando zonas rurales.

“Son líderes criminales en el sur de Anzoátegui”, comentó un líder comunitario.

En la noche “bloquean las vías en zonas agrícolas y ganaderas y extorsionan y amenazan a la gente”, relató. “Y en el día, van a las fincas a extorsionar a la gente. La policía no hace nada y la gente tiene demasiado miedo para denunciar esto”.

Las fuentes que hablaron con InSight Crime no tenían certeza sobre si la impunidad que cobija a las Cupaz se debe a que trabajan con la policía local, o a si la policía se siente demasiado intimidada por los escuadrones de las Cupaz, armados hasta los dientes, como para emprender cualquier acción en su contra.

Como sea, las señales de alerta son claras. Tal como los colectivos antes que ellos, las Cupaz pueden sentirse tentadas hacia la criminalización.

Anzoátegui no es el único estado en el que se están observando esas señales de alerta. También en Lara, hay indicios de que las Cupaz se están zafando del control de sus amos en el gobierno.

“Las Cupaz han excedido los límites en sus acciones de seguridad y lo que están haciendo es usurpar funciones. Hay varios que han sido acusados por los tribunales de usurpación de funciones, delitos agravados, robo”, señaló el comandante de la policía.

Por el momento, las Cupaz siguen siendo el instrumento multipropósito ideal para el régimen de Maduro: un grupo armado híbrido que puede ser controlado directamente por el Estado y que puede desplegarse contra cualquier cuestionamiento al poder estatal, ya sean amenazas específicas, como las bandas criminales y la oposición política, o los riesgos amorfos de descomposición social y económica.

Sin embargo, las señales de advertencia de Anzoátegui, Lara y otros lugares ponen en evidencia los riesgos de esta estrategia. Como sucedió con los colectivos iniciales, existe el peligro de que Maduro pierda el control de este nuevo Frankenstein híbrido.

3

Gobernanza híbrida y los dominios criminales del Tren de Aragua



Hay un barrio bastante peculiar en el estado Aragua, al centro de Venezuela, en donde los habitantes deben obedecer extremas normas de disciplina. Los hombres no pueden salir sin franelas, los niños no pueden salir a la calle luego de las 6 p.m. y las escuelas públicas siguen un régimen casi tan estricto como las militares. En el barrio nadie puede vender drogas ni cigarrillos, y todas las casas deben tener su frente iluminado y decorado con una planta, sin excepción.

Incumplir alguna regla puede llevarlos a “juicio”, donde un “jurado” los sentencia a castigos que van desde ser exiliados del barrio hasta recibir disparos con armas de fuego, e incluso la muerte.

Las férreas normas de convivencia no son impuestas por una institución militar radical ni por el gobierno local, sino por la Fundación Somos el Barrio JK, una organización social que funciona como fachada de la megabanda más poderosa de Venezuela: el [Tren de Aragua](#).

A través de la fundación, este grupo criminal decide sobre casi todos los aspectos, desde lo social hasta lo económico, de la vida de los habitantes de San Vicente, un amplio barrio ubicado en Maracay, la capital de Aragua. A media hora de allí está el principal centro de operaciones de la banda, la cárcel de Tocarón —como es conocido el Centro Penitenciario de Aragua— donde también imponen el orden y regulan la vida de miles de presos.

Tanto en San Vicente como en Tocarón, [el Tren de Aragua](#) se ha convertido en un Estado de facto.

“Tocarón ha sido como un reinado [...] El Estado entregó el control completo”, afirma Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Pero el grupo criminal no ha establecido su reinado solo. La ayuda de elementos del Estado que han creado alianzas para trabajar y coordinar sistemáticamente con la banda, en una especie de gobernanza híbrida que combina lo estatal con lo criminal, ha sido una de las claves de su éxito.

Tocarón, la fortaleza del crimen

La historia del modelo de gobernanza híbrida desarrollado por el Tren de Aragua empieza en Tocarón. La prisión está bajo control del grupo y su líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, [alias “Niño” Guerrero](#), desde la década de 2010, cuando una ola de violencia en cárceles de todo el país [llevó](#) al Estado venezolano a ceder parte del control sobre las prisiones a las bandas carcelarias para disminuir las muertes.

Una vez en control, los criminales aprovecharon los beneficios logísticos y económicos de controlar la prisión, especialmente con el cobro de “causas”, una cuota periódica que los presos pagan a los “pranes” o líderes carcelarios. Al mismo tiempo, expandieron su portafolio con extorsiones y otras economías criminales al exterior de la cárcel, llevadas a cabo tanto por los presos que salen y entran sin problema de Tocarón, como exreclusos y bandas aliadas que controlan territorios.

“Todo lo que genere dinero [en Aragua], de alguna manera debe pagar una cuota a la cárcel”, señaló un miembro del Tren de Aragua cercano a los líderes de la banda, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.

Como buen gerente que vela por sus negocios, el Tren de Aragua ha mantenido a la población carcelaria en orden y al recinto funcionando, aunque no sin sus problemas. Reportes de asesinatos de presos enfermos en Tocarón contrastan con la vida de lujos que la banda ha, literalmente, construido para los presos, pues ahora la cárcel cuenta con parques infantiles y piscinas, un zoológico, gimnasios, un estadio de béisbol recién remodelado y una amplia gama de negocios donde presos y familiares pueden comprar.

“Para el Estado es más fácil que la mantenga ‘Niño’ Guerrero porque la ha sabido mantener”, comentó un exfuncionario del Ministerio de Servicio Penitenciario a InSight Crime bajo condición de anonimato.

El control de la megabanda va mucho más allá del simple mantenimiento del orden a cambio de la impunidad para sus operaciones criminales. El gobierno venezolano ha cedido tantas de sus funciones estatales penitenciarias que la situación podría considerarse una privatización de facto del penal, en donde la banda actúa como un contratista del gobierno.

Así, parte de la logística diaria de cualquier prisión, desde el despacho de suministros hasta la movilización de presos, ocurre gracias a la cercana coordinación entre el Ministerio Penitenciario, las instituciones judiciales y policiales y el grupo criminal.

El exoficial penitenciario, quien trabajó por años en Tocarón y tenía contacto directo con Niño Guerrero, explicó a InSight Crime el funcionamiento de este sistema y las funciones de los trabajadores ministeriales. Su explicación coincide con el mismo sistema que han explicado a InSight Crime investigadores de organizaciones no gubernamentales que estudian las prisiones y la violencia en el país.

La entrega de comida es un ejemplo perfecto. A pesar de que es el ministerio el que envía alimentos para toda la población carcelaria, cerca del 60% de esos recursos terminan en manos de la banda para comercializarlos dentro y fuera de la prisión.

“El pranato sabe todo lo que llega allí”, dijo.

Los traslados de presos funcionan de otra forma, explicó el exfuncionario. Si bien el ministerio puede ordenar traslados de presos desde los retenes policiales a Tocarón, como es la norma, la mayoría de los traslados ocurren cuando los familiares pagan al pran, quien pide a sus contactos en las instituciones llevarlos a cabo.

Si los presos en Tocarón buscan mudarse a otra prisión, también deben pagar al pran, quien coordina la mudanza con el director del penal y el jefe de traslados del ministerio. El pago debe incluir los viáticos del personal penitenciario y judicial involucrado.

Y aquellos presos que “se comen la luz” —como le dicen a violar las normas del pranato— también son trasladados por el ministerio a otros penales. Para que eso suceda, de acuerdo con el exoficial, el Tren de Aragua los lleva al techo de un edificio de la prisión, donde deben coserse los labios y pasar días sin comer hasta que sean recogidos por los oficiales.

Esta clase de acuerdos no son parte de la corrupción de bajo nivel que se ha vuelto usual en las cárceles del país, sino que viene desde los más altos niveles del gobierno.

“Niño’ Guerrero muy poco se reúne. Él solo se reúne con el director y con los que están por arriba del director”, señaló el exfuncionario.

Con impunidad, corrupción y el apoyo de actores políticos, la megabanda hizo de Tocorón su base de operaciones y fortaleza criminal. Pero fue más allá y exportó su modelo de gobierno híbrido a las calles y a las comunidades.

La casa fuera de la prisión

La megabanda instaló su bastión extramural en el barrio San Vicente, que, con cerca de 25.000 habitantes, es uno de los más grandes de la parroquia Los Tacariguas del municipio Girardot.

El barrio ya tenía un historial delictivo debido a la presencia de pequeñas bandas criminales que peleaban por el control de plazas de droga, lo cual empezó a elevar la tasa de homicidios, según le contaron a InSight Crime investigadores académicos y de organizaciones no gubernamentales, policías y residentes de la zona.

En 2014, San Vicente fue incluido en las “Zonas de Paz”, una política que obligaba a las autoridades a suspender operativos policiales en ciertas áreas a cambio de que los grupos locales dejaran las armas.

El plan estatal, que tuvo como objetivo pacificar zonas altamente violentas a partir de mediaciones con las bandas, solo sirvió para fortalecerlas, ya que los criminales incumplieron su parte del acuerdo, mientras que muchas comisarías policiales quedaron desmanteladas.

Aunque no se conoce con certeza en qué momento el Tren de Aragua inició su conquista de San Vicente, es posible que la zona de paz camuflara su llegada. Desde entonces, los operativos de cuerpos de seguridad en búsqueda de criminales vinculados a la cárcel de Tocorón incrementaron. Los nombres de “Niño Guerrero”, “Johan Petrica” y “Larry Changa” eran los más mencionados por policías y reportes de noticias. Ahora, son conocidos como los líderes del Tren de Aragua.

A la par, los criminales llevaron a cabo una campaña de exilio y purga contra todo funcionario de seguridad que residiera en el barrio, ahuyentando a muchos oficiales y asesinando violenta y públicamente a aquellos que decidieron quedarse.

Las tensiones aumentaron a mediados de 2015 con la implementación de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), otro plan nacional pensado para disminuir el crimen, pero esta vez con extrema fuerza y que resultó en cientos de ejecuciones extrajudiciales en varios estados del país.

Gobernanza híbrida en San Vicente, Aragua

El barrio San Vicente, en el municipio Girardot del estado Aragua, es gobernado por integrantes del Tren de Aragua en cooperación con actores políticos.



Tren de Aragua

Controla San Vicente y dicta lineamientos desde la cárcel de Tocarón



Kenferson Sevilla Arteaga, alias "El Flipper"

Miembro del Tren de Aragua y Coordinador de la Fundación JK



Fundación Somos El Barrio JK

Fachada social del Tren de Aragua. Provee ayuda y servicios a la comunidad, impone normas y trabaja con actores estatales



Actores criminales



Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)

Programa de distribución de alimentos subsidiados utilizado para transmitir los mensajes de "El Flipper"



Consejos comunales

Grupos sociales pro gobierno que comunican en San Vicente las normas que impone "El Flipper" y promueven proyectos de la Fundación JK



Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH)

Grupos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que apoyan a la Fundación JK en actividades comunitarias



Políticos

Alcaldes, concejales, gobernadores y ministros oficialistas coordinan proyectos sociales con la Fundación JK, la cual hace campañas al PSUV en épocas electorales



Actores políticos

Junio de 2023

Los enfrentamientos entre las bandas y las fuerzas de seguridad continuaron por un año más, hasta que las acusaciones de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que incluían a los oficiales de Aragua, y múltiples protestas de residentes de San Vicente pidiendo el fin de la presencia policial, llevaron al fin de las OLP.

Con la renovada “paz” de San Vicente, un proyecto que plantaría las semillas para un gobierno híbrido empezó a tomar forma. En abril de 2017 fue lanzado el “Plan Ecosocialista Hogares de Paz” por la entonces ministra para el servicio penitenciario, Iris Varela. El plan consistía en que presos trabajaran como mano de obra para la comunidad con el fin de su reinserción social.

Tras su lanzamiento, el programa fue llevado a cabo en coordinación con una nueva fundación creada pocos meses después: la Fundación Somos El Barrio JK. A través de esta fundación legalmente constituida, el Tren de Aragua canalizó recursos, estableció alianzas con elementos del Estado y empezó a dictar reglas a la comunidad.

A la cabeza de la organización estaba Kenferson Sevilla Arteaga, alias “El Flipper”, uno de los lugartenientes de Niño Guerrero que sobrevivió a los enfrentamientos con la policía. Desde sus primeras apariciones en noticias, los medios lo identificaron como el “pran” de San Vicente.

La Fundación Somos El Barrio JK —por “Juventud Kilométrica” o por las iniciales de Kenferson y su novia, según fuentes— se ha convertido en la principal proveedora de servicios públicos como el funcionamiento del alcantarillado y la electricidad. También ha impuesto su orden en las escuelas, y ha tomado a su cargo los cuidados de la población al realizar visitas médicas casa por casa, organizar talleres de educación sexual, e incluso llevar a cabo campañas de vacunación.

“Ya ha llegado al extremo de que es otro gobierno (...) No puede haber algo que tu hagas dentro de la institución que no se enteren”, dijo a InSight Crime una profesora de San Vicente. Pero agregó que “la gente ha aceptado, ha preferido quedarse con este gobierno que sí le da, que ayuda, que cumple lo que dice”.

La fachada benéfica le ha ganado el favor de muchos de los habitantes que han visto en la Fundación el rol que el Estado ha dejado de cumplir. Pero detrás de ello se esconde el estricto manejo de la vida comunitaria, a la par de una vigilancia extrema, tanto a los residentes como a visitantes, y los violentos castigos que imponen a quien rompa sus reglas.

“Ellos hacen cosas que están en contra de nosotros. No estoy de acuerdo con normas como que nadie puede pelear, la música no se puede poner hasta determinada hora (...) Hay cosas con las que nos tienen atosigados”, manifestó una residente de San Vicente a InSight Crime.

Lograr este nivel de control no fue fortuito. Para ello, el Tren de Aragua, a través de la Fundación, aseguró alianzas con la estructura comunal del gobierno, que incluye los consejos comunales, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) —el principal programa de alimentos subsidiados por el régimen de Maduro— y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), un grupo político de organizaciones con múltiples miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dedicado a la defensa de la ideología bolivariana.

La Fundación ha conseguido un rol tan importante, que sus miembros han formado parte de las ruedas de prensa de eventos gubernamentales. Durante eventos relacionados con Hogares de Paz, representantes de la Fundación se han fotografiado con Varela y demás personalidades del gobierno.



La exministra de servicios penitenciarios, Iris Varela, en un acto en San Vicente, acompañada por Irene Hernández, identificada como presidenta de la Fundación Somos El Barrio JK (Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela).

Una investigadora local, que tiene décadas haciendo estudios sociológicos en Aragua, lo que le ha permitido acceso a instituciones gubernamentales, aseguró que ha identificado a miembros de la Fundación que también trabajan para la alcaldía de Girardot, y están dedicados a establecer vínculos entre ambos entes.

Pero su papel va más allá. En ocasiones, estas personas también actúan como voceros de la banda, e incluso como recolectores de información. InSight Crime conoció que los miembros del CLAP, quienes anuncian la llegada de la comida subsidiada, además transmiten las directrices de El Flipper por grupos de WhatsApp de la comunidad. Además, mantienen un censo actualizado de la población en el barrio, algo que las autoridades competentes no han hecho en años.

El control de la Fundación JK es tan profundo, que figuras políticas locales como concejales y alcaldes son poco conocidos en San Vicente. Sus nombres se escuchan únicamente durante elecciones, cuando la Fundación **apoya públicamente** a los candidatos del PSUV.

Paradójicamente, los residentes han conocido a políticos de envergadura nacional, como la diputada y ex ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela y el ex vicepresidente y exgobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, quienes por años han visitado el sector y llevado consigo regalos y música. Anteriores gobernadores, como Rodolfo Marco Torres, también eran invitados por la Fundación para hacer campaña política. A diferencia de los oficialistas, los candidatos opositores han tenido prohibida la entrada al barrio.

La réplica del modelo San Vicente

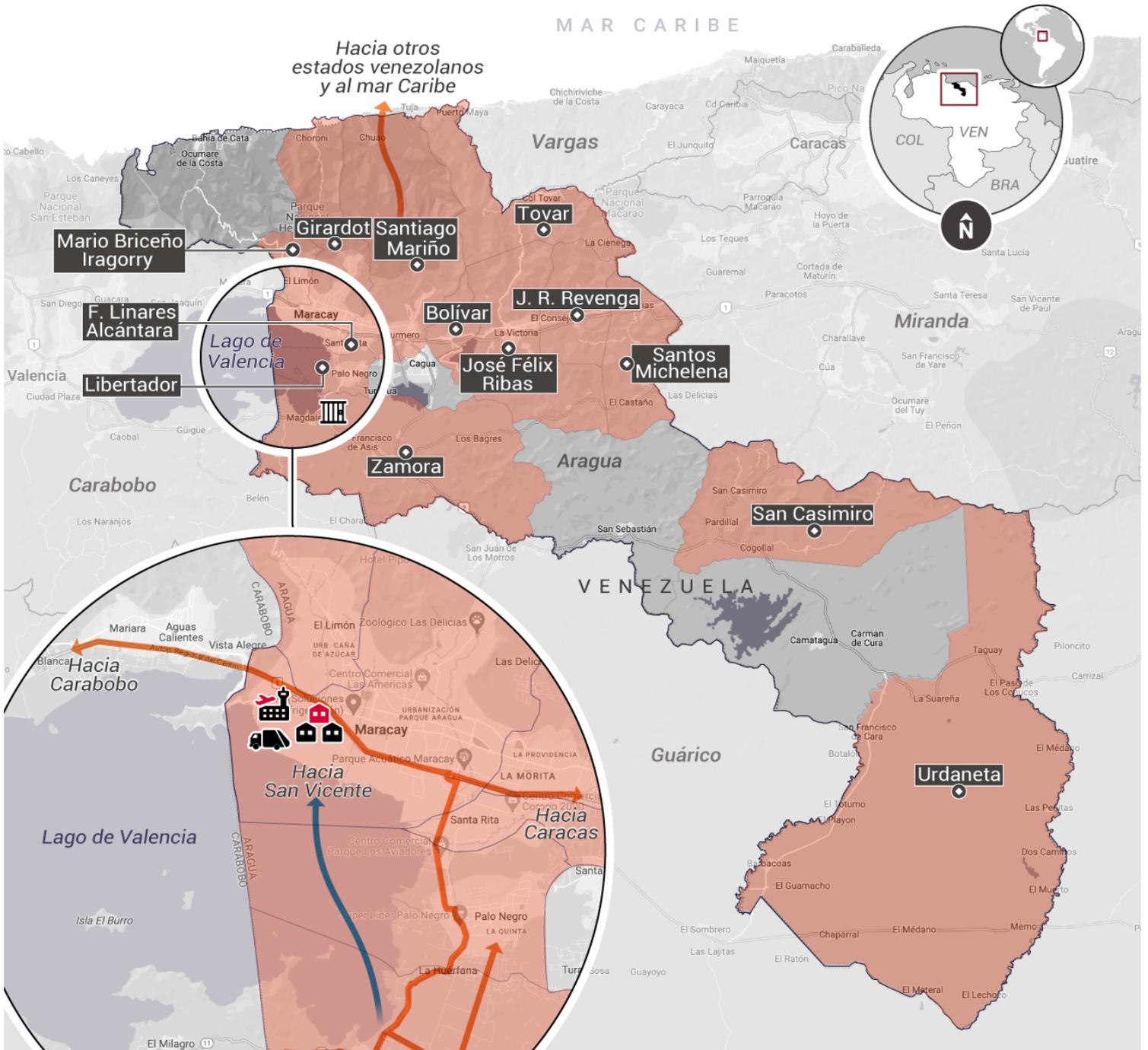
La llegada del Tren de Aragua a San Vicente no fue coincidencia. Controlar un territorio fuera de la prisión les permitía incrementar sus negocios criminales y esconderse de las autoridades cuando fuera necesario.

Para entender el éxito de esta estrategia solo hay que ver un mapa de San Vicente. Su ubicación facilita la movilización por el estado Aragua y por el Lago de Valencia, con el cual colinda. A través del lago se puede llegar fácilmente a Tocarón, o mover mercancías por Aragua y Carabobo, usando lanchas y motos de agua.

Además, en el sector se encuentra un pequeño aeropuerto regional, desde el cual aterrizan y despegan vuelos privados, una zona industrial, cuyas empresas han sido extorsionadas por la banda, y un vertedero de basura, usado tanto para conseguir chatarra que luego contrabandean al exterior, o como centro de acopio y escondite.

“San Vicente fue un experimento que resultó excelente, pero fue por su geografía [...] El basurero es de ellos, y el lago de Valencia. Por eso ellos deseaban tener control total del sector”, explicó el miembro de Tren de Aragua que conversó con InSight Crime.

Presencia de Tren de Aragua en el estado de Aragua, Venezuela



insightcrime.org

Junio 2023

Fuente: Trabajo de campo Unidad de Investigación de Venezuela y reportes de prensa

	Estado de Aragua		Presencia de Tren de Aragua
	Barrio San Vicente		Aeropuerto Nacional Los Tacariguas
	Centro Penitenciario de Aragua		Vertedero de basura
PRINCIPALES CORREDORES DE DESPLAZAMIENTO			
	Corredor terrestre		corredor lacustre
*Además de servir de ruta de escape para sus miembros, estos corredores también son utilizados para el transporte de droga y contrabando.			

El control de la comunidad podría proveer otra serie de beneficios que potencian la actuación del grupo, como el acceso a una población joven para reclutar.

“Ellos tienen un caldo de cultivo muy bueno en San Vicente [...] la gente ve al pran como el modelo a seguir. Él cuando viene aquí trae algo del Estado, trae diversiones, trae regalos, ‘por eso quiero ser como el pran cuando crezca’”, dijo a InSight Crime un antiguo criminal de Aragua.

Las férreas normas no solo sirven para mantener el control, sino también para educar a posibles reclutas más disciplinados y con mayor potencial de liderazgo, opinó la investigadora entrevistada por InSight Crime.

“Esa es la generación de relevo”, señaló.

El dominio del barrio fue tan beneficioso, que continuaron replicando el modelo.

Tanto integrantes del Tren y bandas afiliadas han conquistado sectores a lo largo de Aragua, según efectivos policiales y residentes, donde han implementado sistemas de gobernanza criminal similares a San Vicente, aunque menos radicales.

Las zonas elegidas suelen tener algún beneficio para sus operaciones criminales, como formar parte de rutas de transporte, estar cerca de lugares estratégicos como zonas industriales para extorsionar empresas, ser barrios populosos donde puedan mantener personas secuestradas, o incluso ser lugares despejados para entrenar sus reclutas.

La corrupción en las instituciones ha sido instrumental en la expansión del Tren de Aragua. Múltiples fuentes aseguraron que trabajadores gubernamentales, concejales y alcaldes trabajan de la mano del grupo a cambio de dinero y favores. Los cuerpos policiales también han sido cooptados por el Tren de Aragua. InSight Crime conoció al menos tres casos en que oficiales alegan haber tenido que liberar a criminales vinculados a la banda por órdenes de sus superiores.

Además, el control que ejerce la banda también beneficia al gobierno de Nicolás Maduro. El criminal, cuyo hijo estaba recluido en Tocorón, dijo a InSight Crime que una de las razones por las cuales el grupo existe es para controlar a las zonas chavistas, de la misma manera en que los colectivos reprimen a las comunidades.

“El Estado no puede controlarlo todo, aunque sea una dictadura (...) se sobreentiende que ellos fueron diseñados realmente no como algo económico, sino como algo político, es decir, el Tren de Aragua y los colectivos realmente obedecerían a un mandato exclusivamente político. Así lo ve el gobierno, pero en la realidad no es así”, dijo.

La investigadora coincide en lo mismo. “A ellos los mandaron allí a tener a la gente controlada, ¿Para qué? Para que con esta situación económica la gente del pueblo, que mayoritariamente son chavistas, no se levanten, sino que por terror al Tren de Aragua se mantenga controlado”, explicó a InSight Crime la investigadora local.

A pesar de los marcados factores que caracterizan al Tren de Aragua, otros grupos con diferencias sociales y políticas, como los colectivos o los grupos guerrilleros, han logrado imponer sistemas de gobernanza muy similares, principalmente gracias a los vínculos y la profunda cooperación y colaboración con estructuras del Estado.

“Nadie tiene idea del mundo paralelo que esto representa, hay mucha participación del gobierno”, dijo el miembro del Tren de Aragua a InSight Crime.

4

Las FBL: auge y caída de una guerrilla híbrida



En junio de 2022, una comisión fuertemente armada de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) irrumpió en varias fincas en el estado de Barinas, occidente de Venezuela.

Para sorpresa de los vecinos, los funcionarios no estaban ocupando las propiedades de un miembro de la oposición política venezolana o de un grupo armado adversario del gobierno, como era lo acostumbrado en este tipo de operaciones.

El objetivo de los militares en esta ocasión era lograr la detención de William Alexander Rodríguez, alias “Román Pedraza”, comandante de las **Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL)**, una guerrilla doméstica cuyas estrechas conexiones con el gobierno la llevaron a ser un actor híbrido, una combinación entre grupo criminal y fuerza armada al servicio del Estado.

Aunque para las FBL su condición de híbrido fue una gran ventaja, su elevada dependencia estatal jugó en su contra. Una vez que el gobierno decidió que esta relación ya no era de su interés, los privilegios gubernamentales desaparecieron y las vulnerabilidades de un grupo que no supo subsistir sin el patrocinio del chavismo fueron expuestas.

El ascenso de una guerrilla Bolivariana

Mientras gran parte de las guerrillas en América Latina representaron una amenaza de seguridad para varios gobiernos en la región, las FBL fueron un modelo atípico.

En lugar de buscar la toma del poder por vía armada, la guerrilla venezolana construyó una alianza con el Estado venezolano y utilizó sus vínculos gubernamentales para catapultar su proyecto político-militar.

Surgidas como un movimiento clandestino a mediados de los años 80, las FBL —localmente conocidas como “Boliches”— incursionaron en el mapa criminal venezolano como un grupo armado de izquierda integrado por intelectuales y activistas políticos que buscaron desde sus inicios luchar contra la corrupción en el país.

Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 y el posterior ascenso de la Revolución Bolivariana —nombre que se le otorgó al proyecto político e ideológico del chavismo en Venezuela— varias organizaciones campesinas y populares se volvieron extensiones del Estado y sirvieron de escuderos a los planes del gobierno en diferentes territorios.

Si bien los vínculos directos entre Chávez y las FBL nunca fueron públicos, los diferentes comunicados divulgados por la guerrilla venezolana, sumados a los testimonios de productores agropecuarios, líderes políticos, autoridades religiosas, periodistas y habitantes de los estados de Barinas y Apure recogidos por InSight Crime, son la muestra de una relación que fue más allá de una camaradería ideológica.

“El FBL fue entrenado, equipado e inclusive gente del gobierno financió al FBL”.

Desde un comienzo, las FBL se **describían** abiertamente como “la primera trinchera que tendrá que cruzar el enemigo si intenta (...) destruir los sueños de la mayoría del pueblo de Bolívar”.

En el año 2004, Chávez **invitó** a los comandantes de las FBL a deponer las armas para unirse al componente civil del Ejército venezolano, también conocido como Milicias Bolivarianas.

Sin embargo, esta invitación fue una simulación para ocultar su apoyo a una fuerza armada ilegal, según comentó un político militante de izquierda de Apure que fue testigo del afianzamiento territorial de la FBL y que pidió proteger su identidad por posibles amenazas en su contra.

“Un grupo de ministros determina que no deberían todos entregar las armas porque en la frontera alguien tiene que quedarse cuidando la frontera y ese es el FBL”, le dijo a InSight Crime.

Para el régimen chavista, contar con la colaboración de un brazo armado ilegal, significó que las fuerzas armadas venezolanas no tenían que ensuciarse las manos con **actuaciones extrajudiciales**. Y, aunque en su tarjeta de presentación se vendían como un guardián ante las amenazas externas en la frontera, las capacidades bélicas de la guerrilla fueron mayormente empleadas a **nivel interno**.

En estados como Barinas, Táchira y Apure, bastiones del grupo, las FBL emplearon su fuerza para intimidar, coartar y desplazar a la oposición política venezolana. Desde represiones en manifestaciones políticas, hasta amenazas en contra de candidatos electorales, el régimen contó con la cooperación de una organización híbrida que operaba ilegalmente en nombre del Estado.

A cambio de ejercer el rol híbrido de opresor político, regulador social y protector territorial de manera extralegal, el gobierno venezolano entregó un salvoconducto a los comandantes de los Boliches para que pudieran operar sin limitaciones y con total impunidad.

Así lo confirmó un antiguo miembro del Partido Comunista de Venezuela (PCV), quien prefirió omitir su nombre por razones de seguridad.

“El FBL fue entrenado, equipado e inclusive gente del gobierno financió al FBL. Eso permitió que ellos fueran agarrando fuerza y posicionando piezas de ellos en algunas instituciones para financiar el proyecto”, comentó a InSight Crime.

Esta permisividad estatal abrió la puerta para que algunos integrantes del grupo participaran en **negocios ilícitos** como el secuestro, la extorsión y el contrabando. A pesar de que esto suscitó divisiones internas, la organización siguió operando como guardián de la Revolución.

Ante un gobierno que era complaciente con sus actividades armadas y criminales, el brazo armado de las FBL operaba sin mayores oposiciones y fue permeando de a poco el sistema político venezolano.

El arte de la política armada: la mimetización estatal de las FBL

Con el paso de los años y la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, la relación del FBL con el Estado se fue profundizando y consiguieron en la política un arma más contundente que los fusiles.

A través de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) –la plataforma política y civil de las FBL fundada en 2009– se abrió una puerta para que la organización armada pudiera camuflar sus actuaciones por medio del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“Cuando se acercan no estás observando el peligro porque crees que son personas de tu entorno. Ves las siglas de la CRBZ y los identificas con comunas y no con un grupo armado guerrillero, y resulta que sí son una célula guerrillera que opera bajo la sombra del gobierno”, comentó a InSight Crime un ganadero de Barinas que sufrió intimidaciones por parte de voceros de la CRBZ.



Bajo este contexto, la CRBZ utilizó la plataforma del PSUV para conseguir importantes escaños políticos. Héctor Orlando Zambrano, alias “Lapo”, ocupa el puesto de Diputado de la Asamblea Nacional por el estado Apure desde 2011, mientras que José María Romero, conocido como “Chema”, es el actual alcalde del municipio de Páez en el mismo estado.

Adicionalmente, durante el mandato de Ramón Carrizalez como gobernador del estado Apure entre 2011 y 2021, varios miembros de la CRBZ ocuparon cargos dentro de la gobernación. Luis Tolosa, líder de la CRBZ, administró posiciones importantes en el periodo de Carrizalez y hoy en día está a cargo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en la frontera de Apure.

La misma estrategia de control social con las armas se aplicó en la arena política: quienes se oponían a los planes del gobierno o denunciaban las irregularidades en la frontera recibían la mano dura de un actor armado híbrido que ahora tenía en sus manos el poder legal del Estado.

Un habitante de Santa Barbara de Barinas que fue víctima de amenazas y persecuciones por parte de la CRBZ explicó a InSight Crime cómo la exalcaldesa del municipio Ezequiel Zamora, Maigualida Santana, aprovechó su rol estatal y comandó a las FBL desde su oficina en la Alcaldía.

“La alcaldesa tenía un problema político contigo y llamaba a la guerrilla, y la guerrilla llegaba y se le metía a la casa”, dijo el residente, que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.

Ocaso y reemplazo de un grupo armado híbrido

A medida que el poder político de algunos miembros de las FBL aumentó, sus actuaciones se hicieron más difíciles de controlar y se crearon grietas cada vez más amplias entre la guerrilla y el gobierno.

Un habitante de Barinas y dos productores agropecuarios de la misma región explicaron a InSight Crime que la relación entre las FBL y el gobierno se fracturó luego del [secuestro](#) de Franyeli Guerrero, hija de un aliado de Diosdado Cabello, considerado como el segundo hombre con más poder en Venezuela después de Maduro.

No obstante, el evento que marcó el punto de no retorno surgió a partir de un [conflicto de guerrillas](#) en el estado de Apure.

En esta subregión fronteriza, el FBL convivió por varias décadas con sus primos colombianos, el [Ejército de Liberación Nacional \(ELN\)](#) y las [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia \(FARC\)](#). Aunque ambas guerrillas

los superaron en números, experiencia y destreza militar, las conexiones políticas de la organización venezolana funcionaron como sello de garantía para permanecer intocables.

Sin embargo, este equilibrio de poder cambió a partir de la firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano en 2016. Una vez esta guerrilla entró en el proceso de desmovilización, algunos miembros del antiguo Frente 10 en el departamento colombiano de Arauca —fronterizo con el estado de Apure— se declararon en disidencia y **continuaron operando en la clandestinidad** en ambos lados de la frontera.

Para 2021, la disidencia del **Frente 10** traspasó los límites de los acuerdos que mantenía con el Ejército venezolano y sus aliados, provocando una campaña militar conjunta entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el ELN para expulsarlos de suelo venezolano.

A medida que la violencia se fue recrudeciendo, el 14 enero del 2022, un comando armado del ELN ingresó de manera hostil a la Ciudad Comunal Campesina Simón Bolívar, un territorio de casi 100.000 hectáreas ubicado en el sector de La Gabarra, municipio Paéz, Apure, en donde las FBL formaron en 2008 un “autogobierno” compuesto por diferentes consejos comunales financiados y patrocinados directamente por el gobierno venezolano.

“Más de 50 hombres armados tienen tomado el pueblo de La Gabarra, al más puro estilo de un ejército de ocupación extranjera, desconociendo al Estado Bolivariano, al poder popular y trayendo zozobra y terror en la población”, reclamaron los voceros de la CRBZ por medio de un comunicado.

“Los elenos vendrán a operar de otra forma. No irán a operar como operaban estos tipos”.

De acuerdo con fuentes que hablaron con InSight Crime en los estados de Apure y Barinas, el ELN había ocupado el sector de La Gabarra buscando a miembros de la disidencia del Frente 10. No obstante, invadir la Ciudad Comunal tenía una carga simbólica elevada para el FBL.

A escasos meses de la última denuncia, en abril de ese mismo año, voceros de la CRBZ publicaron varias fotos en donde expusieron una nueva invasión por parte de 80 hombres pertenecientes al ELN en la Ciudad Comunal.

Ambas invasiones tenían un elemento novedoso: el gobierno que antes respaldaba a las FBL no intercedió, demostrando su apoyo tácito a las pretensiones de ELN.

Una vez el Ejército venezolano y el ELN lograron la [expulsión de las disidencias](#) de las FARC de suelo venezolano, volcaron su atención hacia la guerrilla venezolana de las FBL, a quien culparon de apoyar al Frente 10.

InSight Crime habló con dos habitantes de la Ciudad Comunal Simón Bolívar vinculados al trabajo de las FBL en la región, los cuales detallaron el apoyo que brindó la guerrilla venezolana al Frente 10 durante las confrontaciones armadas.

“Supuestamente [las FBL] apoyaron, no en combate propiamente, sino en hacer los corredores (...) para que las FARC salieran de ese conflicto y salieran vía Táchira, salieran vía Barinas o donde ellos tenían presencia”, relató uno de ellos.

Con las fuerzas estatales en contra y un ELN acosando, las FBL quedaron atrapadas.

El gobierno también atacó el brazo político de la organización. El 18 de junio de 2022, una comisión de la DGCIM capturó a 8 integrantes de la CRBZ mientras participaban en un evento político de la Milicia Bolivariana en la localidad de Guasqualito, estado Apure.

En consecuencia, la CRBZ se ha venido adaptando a este nuevo periodo y optó por cambiar su nombre y ahora se hace llamar “[Movimiento Ciudadano VAMOS](#)”, rótulo con el que líderes como Héctor Zambrano se presentan ante la opinión pública.

Por el lado de su brazo armado, diferentes fuentes en la frontera entre Colombia y Venezuela, incluyendo periodistas, residentes, líderes políticos locales y víctimas de las FBL, desconocen el paradero de alias “Román” o de Jerónimo Paz, sus principales comandantes, quienes probablemente se encuentren escondidos después de la arremetida estatal en su contra.

El paradero de los combatientes de las FBL en terreno tampoco es claro. Durante su última visita a Apure a comienzos de 2023, InSight Crime pudo hablar con varios residentes, quienes aseguraron que la única fuerza armada ilegal que quedó en el territorio después de la batalla de Apure fue el ELN.

Sin embargo, el régimen de Maduro no iba a sacrificar a una herramienta tan útil como el FBL sin tener un plan de respaldo.

Los enfrentamientos con el Frente 10 en Apure reconfirmaron el posicionamiento y rol del ELN como un [grupo paramilitar proestatal](#) con el que el gobierno podía coordinar complejas operaciones militares y criminales.

A medida que esta guerrilla fue exhibiendo su disciplina y capacidad militar en su **expansión por suelo venezolano**, demostró su potencial como un actor armado híbrido que le garantizará al régimen la gobernanza en territorios estratégicos, poblaciones y economías ilícitas.

Pero el ELN es una criatura diferente a las FBL. Mientras que las FBL representaron un híbrido con elementos de un actor criminal incrustado en el Estado, el ELN cumple el papel de un actor híbrido con elementos de un grupo armado cooperativo, cuya relación con el gobierno está condicionada principalmente por el volumen de ganancias provenientes de diversas economías criminales.

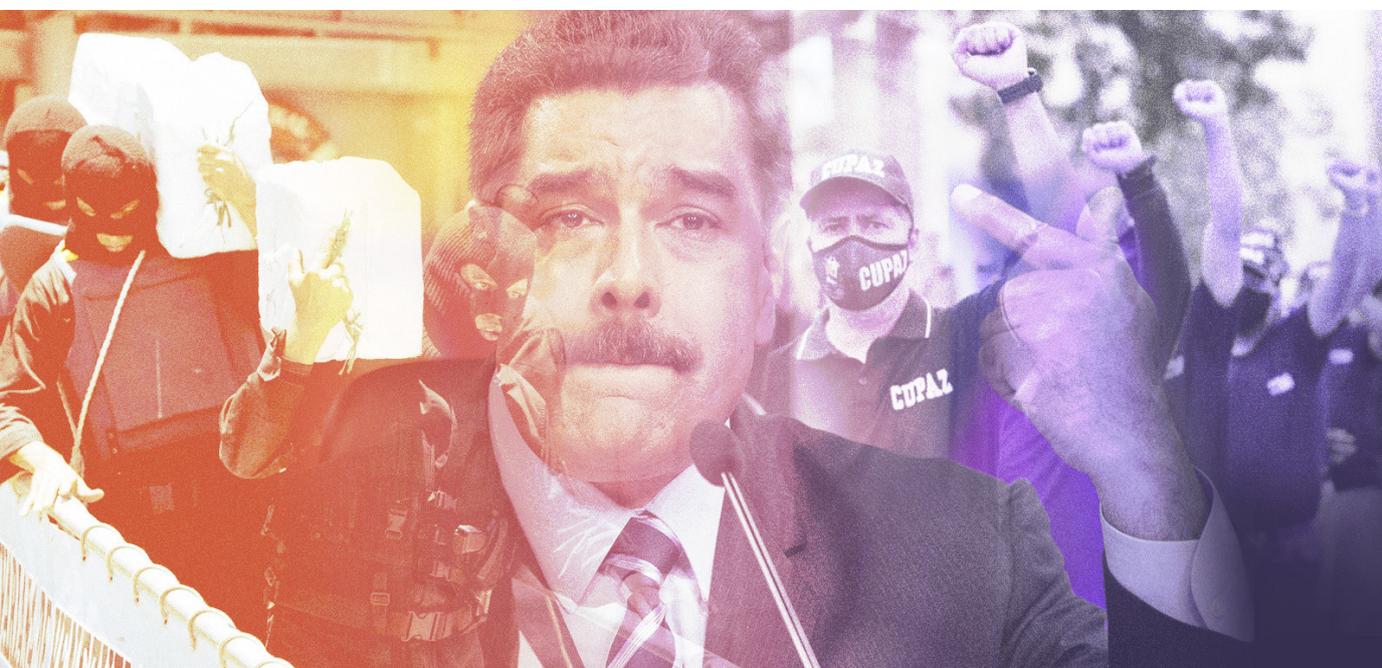
“Los elenos vendrán a operar de otra forma. No irán a operar como operaban estos tipos”, aseguró a InSight Crime un habitante de la frontera que sufrió de primera mano la violencia de ambas organizaciones armadas.

Depositar la confianza en un grupo superior militarmente y que, a su vez, no depende de su relación con el Estado venezolano para subsistir, es una señal de que el gobierno está haciendo negocios peligrosos. En dado caso que decida que la alianza con el ELN ya no está dentro de sus intereses, prescindir del grupo no será tan sencillo como lo fue con las FBL, una organización con limitado alcance territorial y cuestionable poder armado.

Enemistarse con una guerrilla de naturaleza binacional —que cuenta con el aprendizaje militar y criminal de décadas como un grupo insurgente en Colombia— puede desembocar en un nuevo conflicto armado que afecte toda la frontera y ponga en entredicho las capacidades de las fuerzas armadas venezolanas.

5

El desafío de Maduro: reformar el Estado híbrido de Venezuela



La evolución del Estado híbrido en Venezuela, que combina la gobernabilidad con la criminalidad, le ha permitido al presidente Nicolás Maduro mantenerse en el poder, incluso a pesar de que su gobierno ha estado durante años luchando contra crisis casi constantes. Pero ese panorama está comenzando a cambiar lentamente, y el Estado híbrido de Maduro está cambiando también.

Las amenazas directas al poder de Maduro —las protestas masivas, la oposición política venezolana y los esfuerzos geopolíticos de los opositores internacionales— no han desaparecido, solo han disminuido, perdiendo el impulso que en algún momento parecía que podría derrocarlo. También permanece la principal amenaza indirecta: el colapso económico. Pero este ya no es tan apremiante. Si bien los pronósticos siguen siendo malos, la economía es al menos estable, en comparación con los desesperados años pico de la crisis.

Estas dinámicas cambiantes requieren nuevas estrategias para que Maduro y el movimiento político chavista pasen de la supervivencia a la consolidación; se trata de estrategias para lograr el levantamiento de las sanciones internacionales, la reactivación de la industria petrolera y para apaciguar las dudas sobre la legitimidad de las elecciones en Venezuela y sobre el gobierno de Maduro.

Dichos objetivos serán difíciles de lograr mientras permanezcan la corrupción desenfrenada, la criminalidad y la palmaria subversión del proceso democrático que ayudó a mantenerlo en el poder. Y no hay indicios de que Maduro tenga intenciones de cambiar la naturaleza cleptocrática y autoritaria de su régimen. De hecho, si lo hace podría quedar aún más vulnerable.

El análisis de sus estrategias en los últimos dos años indica que Maduro es consciente de esto y está tratando de establecer un Estado híbrido que sea más confiable, más fácil de controlar y de más bajo perfil, aunque no menos criminal.

Como InSight Crime analizó en el primer capítulo de esta serie, el Estado híbrido en Venezuela tiene tres pilares principales: grupos armados híbridos, que cooperan y coordinan sistemáticamente sus actividades y estrategias con el Estado; una gobernanza híbrida, en la que los grupos armados y las redes criminales trabajan junto con el Estado para gobernar determinados espacios e imponer el control social; y economías híbridas, que combinan el control estatal y criminal de los recursos y las cadenas de suministro. A continuación, analizamos las tendencias más recientes en cada una de estas áreas.

Grupos armados híbridos

En febrero de 2023, InSight Crime publicó un artículo denominado [Los 10 grupos criminales que dominan el hampa en Venezuela](#), en el que se numeran las organizaciones criminales más poderosas del país. Los cinco primeros podrían considerarse grupos híbridos como tal, o al menos grupos cooperantes con características híbridas, en tanto que los cinco últimos se encuentran entre los principales objetivos de las operaciones de seguridad actuales. Es probable que esto no sea una coincidencia.

El análisis de las estrategias de seguridad actuales indica que los híbridos más confiables se están fortaleciendo, y que el régimen de Maduro está atacando a otros grupos del crimen organizado con todo el peso de las fuerzas de seguridad.

Esto ha quedado claro con [el uso de megaoperaciones](#): despliegues masivos de cientos e incluso miles de policías y soldados fuertemente armados contra pandillas como el Tren del Llano, la pandilla de Wilexis y la pandilla de El

Koki. Y ha sido evidente en las [campañas militares](#) contra grupos guerrilleros que antes eran aliados, como los frentes 10 y 33 de la [ex-FARC mafia](#) y, como se informó en el capítulo 4 de esta investigación, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación ([FBL](#)).

En contraste, los grupos que ofrecen los mayores beneficios para el régimen, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ([ELN](#)) y el [Tren de Aragua](#), han quedado en general intactos, a pesar de que son considerados como las mayores amenazas para la seguridad del país.

Por otro lado, la creciente criminalidad de los primeros híbridos de Venezuela, los colectivos, no se ha enfrentado con la fuerza, sino con intentos de controlarlos y cooptarlos, como se muestra en el Capítulo 2 de esta serie.

Es probable que esta tendencia continúe en tanto Maduro busque poner más orden en el crimen organizado venezolano, para garantizar que los beneficios de dicha hibridez sean disfrutados solo por los socios más útiles y confiables. Su mayor desafío en este sentido puede estar en las áreas donde los grupos criminales que se han convertido en objetivos del gobierno nacional han establecido relaciones híbridas con actores estatales locales, creando conflictos internos entre diferentes ramas del Estado.

Gobernanza híbrida

En los últimos años, el gobierno de Maduro ha intentado dar marcha atrás a muchas de las formas originales de gobernanza híbrida, que se basaban en acuerdos negociados como resultado de las debilidades del Estado.

Muchas de las “[Zonas de Paz](#)“, de donde las fuerzas de seguridad se retiraron a cambio de que las pandillas redujeran la violencia, han sido recuperadas mediante grandes operaciones de seguridad que han terminado con el dominio de grupos como [la banda de El Koki](#) en el barrio Cota 905 de Caracas, [la banda El Conejo](#) en el municipio Aragua de Tejerías, y las diversas bandas de la región Valles del Tuy en el Estado Miranda.

Asimismo, en el sistema penitenciario, el control de los jefes de las bandas, conocidos como *pranes*, ha sido sofocado en varias prisiones mediante la implementación del [Nuevo Régimen Penitenciario](#). Este programa impone controles más estrictos sobre la vida en prisión, reduciendo tanto el poder como las oportunidades económicas de los miembros de las bandas en prisión. Si bien los *pranes* aún controlan casi el 60% de la población carcelaria, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el Estado puede mantener bajo control a los que aún permanecen, amenazando con imponerles condiciones más duras o transferirlos a prisiones que se rigen por el nuevo régimen.

Sin embargo, dichos acuerdos se han dejado vigentes allí donde fortalecen al Estado, como es el caso del control del Tren de Aragua en la Zona de Paz de San Vicente y la cárcel de Tocarón, tema del Capítulo 3 de esta investigación. Además, ha venido aumentando la gobernanza criminal en las zonas bajo el control de aliados híbridos, sobre todo [los colectivos](#) y [la guerrilla del ELN](#). Los grupos armados ya desempeñan un papel central en la imposición del control social y político, y en la captura de recursos económicos.

Economías híbridas

Las economías híbridas han demostrado ser un arma de doble filo para el gobierno de Maduro. Por un lado, han sido una forma importante para canalizar recursos hacia los grupos armados híbridos y las redes criminales insertas en el Estado, cuyo respaldo le ha sido útil a Maduro para mantenerse en el poder. Pero, por otro lado, al hacerlo han socavado el funcionamiento del Estado, con graves repercusiones políticas y sociales.

Hay señales de que el gobierno está tratando de detener las economías híbridas más dañinas y poner en jaque algunas de las redes criminales insertas en el Estado que se dedican a dichas economías.

Ha habido un gran aumento de las operaciones contra el contrabando de combustible, un comercio generalmente controlado por redes de corrupción que afecta gravemente tanto el funcionamiento de la economía como la vida cotidiana de la población. Solo en los primeros cinco meses de 2023, las autoridades reportaron incautaciones de combustible en niveles tres veces más altos que en todo 2021, según el monitoreo hecho por InSight Crime en los informes de medios y en fuentes oficiales.

También ha habido un aumento de los arrestos y operaciones contra [el tráfico de chatarra](#), del que se benefician las redes insertas en el Estado mediante el saqueo de sitios industriales, que el gobierno necesita en funcionamiento si quiere reactivar la industria petrolera. En los primeros cinco meses de 2023, las autoridades reportaron la incautación de 187,1 toneladas de chatarra, en comparación con 59,7 toneladas en 2021, según el monitoreo de InSight Crime.

En contraste, las economías híbridas que no representan costos tan altos, como la venta de bienes subsidiados en el mercado negro y [las ganancias obtenidas de los servicios públicos](#), han quedado en general intactas.

El mayor desafío de Maduro, y su principal objetivo estratégico, es controlar la economía híbrida más lucrativa: [el comercio de oro](#). En este sentido, los acontecimientos del último año indican que el gobierno está tratando una vez más de imponer el control estatal sobre el principal centro de minería de oro del país, el estado Bolívar.

Múltiples fuentes entrevistadas por InSight Crime, como mineros, periodistas y residentes del estado, señalan que las operaciones de seguridad se han dirigido tanto a grupos armados adversarios como a grupos armados que antes eran cooperantes, **y han dejado intactos a los que tienen relaciones más híbridas**. Si bien el objetivo general de las operaciones no es claro, las fuerzas armadas también han estado desplazando a los mineros informales y tomando un control más directo de los sitios mineros; por otro lado, las fuentes hablan de nuevas compañías mineras que llegan al área.

Falta ver si las bandas mineras conocidas como sindicatos pueden mantenerse a raya, y si esta vez el gobierno puede encontrar el capital y la experiencia técnica para establecer un comercio legal de oro menos dependiente de los grupos armados.

Contenido relacionado

Conozca más sobre el cubrimiento exhaustivo que InSight Crime ha realizado sobre la colusión entre el crimen organizado y el Estado en Venezuela. En los últimos años, la Unidad Investigativa de Venezuela ha develado cómo grupos armados y economías criminales funcionan en el país bajo el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro.



Las guerrillas colombo-venezolanas: la migración de la guerra de Colombia hacia Venezuela

COLOMBIA / 3 OCT 2022

Durante veinte años, Venezuela fue refugio de las guerrillas marxistas de Colombia, un lugar donde podían esconderse de los militares colombianos...

[LEA AQUÍ >](#)



La revolución de la cocaína en Venezuela

CARTEL DE LOS SOLES / 2 MAY 2022

n 2013, Nicolás Maduro llegó a la presidencia de Venezuela tras la muerte de su carismático predecesor Hugo Chávez...

[LEA AQUÍ >](#)



El Dorado de Maduro: Bandas, guerrillas y el oro de Venezuela

CARTEL DE LOS SOLES / 18 NOV 2021

Esta investigación muestra que los intentos del régimen de Maduro por controlar el corazón minero de Venezuela en el estado Bolívar han llevado al caos criminal...

[LEA AQUÍ >](#)



InSight Crime es una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe: el crimen organizado. Durante una década, InSight Crime ha cruzado fronteras e instituciones — como una amalgama de medio periodístico, centro de pensamiento y recurso académico — con el fin de profundizar y orientar el debate sobre el crimen organizado en el continente americano. Los reportajes en terreno, la investigación minuciosa y las investigaciones de alto impacto han sido características distintivas de la organización desde sus inicios.

Para más información, visite es.insightcrime.org